

Chile es país de origen, tránsito y destino de hombres, mujeres y niños víctimas de la trata de personas con fines de explotación sexual (trata sexual) y laboral. Tanto mujeres y menores chilenos como mujeres y niñas de otros países latinoamericanos, y probablemente de Asia, son víctimas de la trata de personas con fines de explotación sexual en el país. Hombres, mujeres y niños, en su mayoría de otros países latinoamericanos y asiáticos, realizan trabajos forzados en los sectores de la minería, la agricultura, la construcción, las ventas ambulantes, la hotelería y restauración, la indumentaria y el servicio doméstico. Las autoridades informaron que los inmigrantes chinos también podrían ser vulnerables a la trata sexual y laboral. En 2014 identificaron a 90 menores que participaban en actividades ilícitas, entre ellas el tráfico de drogas y los robos, y es probable que algunos de ellos fueran víctimas de la trata de personas. Las autoridades chilenas declaran que Chile es un país de tránsito para las víctimas de la trata de personas de otros países, probablemente con destino a Europa, y que quizás algunas mujeres chilenas hayan sido objeto de la trata sexual en otros países. Organizaciones no gubernamentales (ONG) informaron que agentes de policía solían frecuentar prostíbulos en pueblos pequeños, lo cual disuadía a las supuestas víctimas de la trata de personas de denunciar la explotación.

El Gobierno de Chile cumple plenamente con las normas mínimas para la eliminación de la trata de personas. Las autoridades aumentaron el número de condenas de tratantes de personas con fines de explotación sexual de conformidad con las leyes contra la prostitución infantil y continuaron ofreciendo servicios especializados a los niños y a las mujeres víctimas de la trata sexual. El gobierno estableció seis nuevos grupos de trabajo regionales para combatir la trata en 2014. Si bien las autoridades aumentaron la capacitación de los socorristas de primera línea, muchos funcionarios del gobierno no tenían la preparación ni los recursos adecuados para identificar a las víctimas y remitirlas a servicios especializados. Las autoridades no procesaron varios casos de trata sexual de menores dentro del país según la tipificación legal de trata de personas, lo que dificultó la aplicación de condenas suficientemente severas y la evaluación correcta de las labores de la lucha contra la trata, en tanto que la mayoría de los tratantes condenados quedaron

en libertad.

RECOMENDACIONES PARA CHILE

Intensificar las labores de investigación y enjuiciamiento de todas las formas de la trata de personas de conformidad con la Ley 20507, condenar y penalizar a los tratantes con condenas suficientemente severas y ordenar el resarcimiento de las víctimas, si correspondiera; con la cooperación de la sociedad civil, ampliar el acceso de las víctimas a servicios integrales, remitir más casos a estos servicios y asignar más fondos para los mismos; proporcionar más instancias de capacitación a los socorristas de primera línea para que puedan identificar a las víctimas y ejecutar el nuevo protocolo de asistencia; reforzar la aplicación de la ley contra la trata de personas, y así enjuiciar a los acusados de la trata sexual de menores; aplicar mecanismos para que los casos de prostitución de menores en beneficio de terceros sean remitidos a la policía y a fiscales especializados en la trata de personas; y proporcionar directrices para que las fuerzas del orden y los funcionarios judiciales tengan clara conciencia de que la prostitución de menores en beneficio de terceros constituye trata de personas; continuar fortaleciendo la capacidad de las fuerzas del orden público para investigar los casos de trata de personas fuera de la capital, en particular los que impliquen posible trabajo forzoso y servidumbre doméstica; elaborar directrices para que, mediante indicadores de la trata de personas, los funcionarios puedan detectar a menores que participan en actividades ilícitas; seguir mejorando la recopilación de datos, los mecanismos de coordinación interinstitucional y la comunicación con ONG.

ENJUICIAMIENTO

El gobierno intensificó las labores para el cumplimiento de la ley contra la trata de personas. La Ley 20507 prohíbe todas las formas de la trata de personas y prescribe sanciones que van desde cinco años y un día hasta 15 años de cárcel, además de multas, para delitos relacionados con la trata. Estas sanciones son lo suficientemente estrictas y acordes con las previstas para otros delitos graves, como la violación. Las autoridades chilenas investigaron y enjuiciaron muchos casos de trata sexual de menores en el país de conformidad con el Artículo 367 del Código Penal, el cual penaliza a quienes promueven o facilitan la prostitución de menores. Las sanciones, que para este tipo de delitos oscilan de tres años a cinco años de cárcel, son menos severas que las impuestas por

violación, y, en la práctica, generalmente se las conmuta por libertad condicional o se las suspende.

En 2014 la policía abrió investigaciones para 14 nuevos casos de trata sexual y dos de trata laboral. Fiscales chilenos iniciaron 118 juicios por trata de personas en 2014, entre ellos 115 por facilitar la prostitución de menores y solo tres por trata de adultos conforme a la ley contra la trata de personas. Esto representa un aumento en relación con los 71 enjuiciamientos por prostitución de menores iniciados en 2013, pero también revela una marcada disminución de otros procesamientos judiciales por trata, ya que ese año se habían iniciado 18 acciones legales. Las autoridades condenaron a cinco tratantes de trata sexual internacional en el marco de la Ley 20507 en 2014 y dictaron 22 condenas para una cantidad desconocida de tratantes conforme al Artículo 367. Ninguno de los cinco condenados en virtud de la ley contra la trata de personas fue encarcelado; se suspendieron las condenas de casi todos ellos o se les impusieron multas, en tanto que uno fue condenado a 600 días de cárcel. Las condenas para los tratantes en virtud del Artículo 367 oscilan de 300 días a cuatro años de cárcel, sin embargo, la mayoría de ellos fueron puestos en libertad condicional o se suspendieron sus condenas. Si comparamos con el año 2013, las autoridades condenaron a siete tratantes de personas con fines de explotación sexual y a dos por trata laboral en el marco de las leyes contra la trata y a tres tratantes en virtud del Artículo 367. Las autoridades investigaron a un ex jefe de policía por participar en actividades de explotación sexual de menores con fines comerciales durante el desempeño del cargo. No se notificaron juicios ni condenas de funcionarios públicos por presunta complicidad en delitos relacionados con la trata de personas. Las autoridades proporcionaron capacitación obligatoria sobre la trata de personas en la academia de policía para todos los detectives recién incorporados y publicaron una guía de las mejores prácticas sobre investigaciones en la materia. El gobierno proporcionó capacitación especializada sobre la trata de personas a 400 funcionarios en 2014, entre ellos fuerzas del orden, fiscales, funcionarios judiciales, asistentes sociales e inspectores laborales, a menudo con la colaboración de ONG y organizaciones internacionales. Las autoridades mantuvieron una unidad de investigación policial en Santiago para la trata de personas y tráfico ilícito de migrantes y estableció otra en Iquique para ocuparse de los casos en el norte de Chile. Las

fuerzas del orden declararon que la falta de intérpretes competentes dificultó algunas investigaciones de trata de personas extranjeras. La fiscalía mantuvo en funciones a un grupo de trabajo interno sobre la trata de personas.

PROTECCIÓN

Las autoridades trabajaron para lograr la protección de las víctimas de la trata de personas. En el curso del año, los fiscales identificaron a 16 probables víctimas de trata, una cantidad bastante menor que las 164 que se encontraron en 2013. Dos de ellas fueron víctimas de la trata laboral y 14 de la trata sexual. La mayoría no fueron identificadas como víctimas de la trata sexual de menores, en tanto que el Servicio Nacional de Menores (SENAME) identificó y brindó asistencia a 1.290 niños víctimas de la trata sexual con fines comerciales en 2014. Las autoridades utilizaron un protocolo interinstitucional de asistencia a las víctimas que establece directrices y responsabilidades para los organismos gubernamentales en cuanto a la atención a las víctimas de la trata de personas, pero las fuerzas del orden no tenían ninguna guía que los orientara sobre cómo tratar a las supuestas víctimas de la trata de personas que se encontraban detenidas o puestas bajo detención preventiva debido a presuntos actos delictivos, como es el caso de los niños que habían participado en actividades ilegales. Si bien el gobierno aumentó la capacitación de los socorristas de primera línea en la identificación de víctimas, entre ellos funcionarios de salud pública y trabajadores sociales, algunas ONG manifestaron que gran parte de los funcionarios que estaban a cargo de identificar y asistir a las víctimas no tenían la capacitación adecuada, sobre todo cuando se trataba de casos de trata laboral.

Los servicios para las víctimas siguieron siendo desiguales en las distintas partes del país. Las 16 posibles víctimas identificadas por los fiscales fueron asistidas directamente por ONG o por la Fiscalía Nacional. En 2014, esta última entregó CLP \$1,39 millones (US \$2.290) en concepto de asistencia a las víctimas de la trata, incluido el alojamiento. Casi todas las ONG que asistieron a víctimas de la trata de personas recibieron alguna forma de financiamiento del gobierno, pero todas manifestaron que los fondos no eran suficientes para prestar todos los servicios que eran necesarios, sobre todo para el funcionamiento de los albergues. El gobierno facilitó CLP \$85 millones (US \$140.000) para financiar un albergue a cargo de una ONG para mujeres víctimas de la trata de personas, mujeres

ingresadas ilegalmente al país y para sus hijos. En el albergue se hospedaron seis mujeres extranjeras en 2014, una de ellas víctima de la trata laboral, y se les proporcionaron servicios médicos, de inmigración y empleo. El SENAME, que cuenta con una red nacional de 17 centros de atención para menores sometidos a explotación sexual con fines comerciales, incluidos varones, prestó servicios a menores víctimas de la trata sexual. En 2014, dichos centros recibieron CLP \$1.540 millones (US \$2,54 millones) para estos programas administrados por las ONG. El SENAME también financió un albergue residencial exclusivamente para menores víctimas de la trata sexual con fines comerciales donde ese mismo año se hospedaron 30 niños. Las autoridades proporcionaron asistencia legal a algunas víctimas de la trata de personas en el curso del año, aunque algunas ONG manifestaron que la mayoría de los servicios fueron prestados por la sociedad civil. La asistencia especializada para víctimas masculinas fue limitada. Faltaron servicios de reintegración social, como la educación y la reinserción laboral. Los funcionarios explicaron que los tratamientos mentales de calidad eran costosos y solo para unos pocos. En 2014 las víctimas extranjeras podían solicitar visas para obtener la residencia temporal con permiso para trabajar durante seis meses como mínimo; se otorgaron cuatro de estas visas durante el año. Para dar solución a la larga espera que tenían que afrontar quienes deseaban obtener visas temporales en 2013, el gobierno agilizó el proceso de solicitud de visas en la zona de la capital. Los agentes de inmigración exigieron que los fiscales pagaran los aranceles de las visas de las víctimas, haciendo uso de los escasos fondos para la asistencia. La ley también estipula el derecho de las víctimas extranjeras a tramitar la regularización de su condición jurídica en Chile. En 2014 el gobierno no concedió ninguna compensación a víctimas por demandas civiles o penales. No se notificaron casos en los que el gobierno hubiera sancionado a víctimas de la trata de personas por actos ilícitos cometidos como consecuencia directa de haber sido objeto de la trata de personas.

PREVENCIÓN

El gobierno mantuvo las labores de prevención. El Ministerio del Interior siguió liderando el grupo de trabajo interinstitucional contra la trata de personas con tres subcomisiones, que incluían a organismos gubernamentales así como a organizaciones internacionales y ONG locales. El grupo ejecutó el plan de acción nacional vigente y por primera vez publicó estadísticas sobre la trata de personas.

Las autoridades establecieron seis grupos de trabajo regionales en el transcurso del año y tomaron algunas medidas para aumentar la concientización sobre la trata de personas, entre ellas campañas de prevención sobre todo en lo relativo a la explotación sexual de menores con fines comerciales. Las autoridades proporcionaron capacitación a las tropas chilenas antes de enviarlas en misiones internacionales de mantenimiento de la paz. El gobierno tomó medidas para reducir la demanda de la trata sexual de menores mediante el enjuiciamiento de personas que pagaban por tener sexo con niños prostituidos, pero no hizo nada para disminuir la demanda de trabajo forzoso. También proporcionó capacitación y orientación al personal diplomático en materia de lucha contra la trata de personas.